

Cal viva sobre Montesquieu

ÓSCAR SÁNCHEZ ALONSO

«**P**ERMITA que le pregunte si merece la pena encubrir a un Gobierno que miente y delinque». La frase la formula el laureado Kevin Costner, dando vida al fiscal Jim Garrison en la película «JFK, caso abierto». Un fiscal, al que interpreta, que no está dispuesto a conformarse con la versión oficial e interesada; y que apuesta por llegar al fondo de la trama.

Como en la película de Oliver Stone, también en nuestro suelo patrio son unas siglas las que nos traen a mal traer. Nuestro caso –del mismo modo– está permanentemente *abierto* y no se cerrará nunca si se empeñan en tapanlo de forma chapucera, ruin y sucia.

La política (y el Poder –en concreto–) tiene una tremenda facilidad para decir lo que le conviene sin importar lo más mínimo la incoherencia o desajuste entre las distintas afirmaciones. Así, el Gobierno, tras negarse a desclasificar los traídos y llevados papeles del CESID, no tiene el menor reparo en continuar afirmando que está dispuesto a colaborar con la Justicia. Tiene gracia. Sobrada gracia. Maldita gracia.

La ministra de Justicia siempre se mostró partidaria de entregar esos documentos *secretos* (a voces), pero al final la convenció el ministro de Defensa con su ingente oratoria y capacidad de persuasión. Ahora, doña Margarita Mariscal de Gante insiste en que el anteproyecto

de Ley de Secretos Oficiales hace compatibles los valores de Seguridad y Justicia.

Sorprendente equilibrio el que vislumbra. Si el Gobierno puede decidir –a su libre albedrío– qué clasifica como secreto, y si el Gobierno –con buena dosis de arbitrariedad– goza de capacidad como para decidir qué espinoso tema extrae al control de la legalidad y la justicia, si toda esa burda patraña se ajusta a un Estado de Derecho... que alguien nos conserve tan extraordinaria y sin igual vista.

Dejar en manos de un poder del Estado –en este caso el Ejecutivo– tan amplio margen de maniobra echa por tierra las más básicas reglas del juego democrático. Alfonso Guerra dijo en sus tiempos de gloria que Montesquieu estaba muerto. Y para no tener que desdecirse, él, su secretario general y su avasallador rodillo parlamentario pusieron buen empeño en darle mala vida. El pobre Montesquieu acabó, hecho trizas, lleno de moratones y magulladuras. Ahora, si el *inclasificable* anteproyecto de secretos oficiales continúa adelante, al pobre barón de Secondat lo podemos enterrar definitivamente con *cal viva* y a golpe de *seguridad del Estado*.

Qué «seguros» vamos a estar viviendo en un país *oficialmente clasificado*. La división de poderes ha sido *microfilmada*. La transparencia de la actividad

pública se incorporará a unas innovadoras *microfichas* que algún arcano espacio ha de guardar. Y, en definitiva, el control del Poder –inseparable al funcionamiento democrático– quedará recluido en alguna extraña *cintateca*, cerrada bajo las famosas (70 veces siete) llaves.

El anteproyecto anunciado, aunque se empeñe el Gobierno, no permitirá la Justicia, porque no se puede ser justo cuando los desmanes y abusos –por *secretos* y *oficiales* que sean– salen a la luz 50 años después. Y tampoco conduce a la Seguridad que verdaderamente debe proteger. Asegurará a unos cuantos intereses e individuos, pero no garantizará la seguridad de los derechos y libertades de la persona; como tampoco hará nada por la vigencia y desarrollo de un auténtico sistema constitucional.

Ya sabemos que la verdad no siempre es agradable y ya sabemos que para el Poder, normalmente, es más amenaza que amiga. Qué se le va hacer. El GAL, ese *caso abierto* de nuestro sistema político, no va a cicatrizar mientras insistan en emplear los brebajes del oscurantismo y la ocultación. El PP logró el apoyo de un buen sector de la población que, por encima de estar más o menos próximo a sus posiciones ideológicas, deseaba cambiar unas prácticas y modos de gobernar. El PP anunció la regeneración. Tendría ésta un mal prólogo si renunciamos a encarar –como corresponde– el pasado.